

# Artículos

## Un camino insurgente a la democracia La movilización popular, los intereses económicos y las transiciones de los regímenes en El Salvador y Sudáfrica<sup>1</sup>

*Elisabeth Jean Wood<sup>2</sup>*  
*Universidad de Nueva York*

### Resumen

En El Salvador y Sudáfrica, la movilización de los marginados a nivel económico y social impulsó la transición hacia la democracia, lo cual produjo la liberalización inicial del régimen y sentó, finalmente, las bases políticas y económicas para un acuerdo de democratización. Estos casos nos brindan la oportunidad para analizar el mecanismo mediante el cual la movilización “desde abajo” impulsa algunas transiciones de régimen. En este camino insurgente a la democracia, una movilización sostenida de personas pobres y de clase obrera transformó intereses claves de las elites económicas, presionando de tal manera al Estado, que éste tuvo que establecer acuerdos con los insurgentes, fortaleciendo así a los moderados del régimen contra los de línea dura. De esta manera tuvieron lugar las transiciones negociadas hacia la democracia. Los personajes centrales de estas transiciones no eran los grupos de la elite en competición entre ellos mismos, tal como ha sido el caso de la mayoría de las transiciones en América Latina y el sur de Europa, sino representantes de distintas clases, cuyos conflictos de interés económico impulsaron el conflicto armado y cuya interdependencia económica contribuyó a su resolución, a favor de la democratización.

1. Traducido al español por Anne Kamsvaag.

2. *Nota de la autora*: Este artículo fue publicado en *Comparative Political Studies*, Vol. 34, No. 8, octubre, 2001, pp. 862-888. Traducción reimpressa con autorización. Por comentarios hechos a versiones preliminares o por trabajo relacionado con ellas, agradezco a William Barnes, Vince Boudreau, Samuel Bowles, Ruth Berins Collier, George Downs, Richard Fagen, Johannes Fedderke, Michael Foley, Jeff Goodwin, Jeffrey Herbst, Samuel Huntington, Terry Karl, David Lewis, Roy Licklider, Charles Meth, Barrington Moore, Jr., Nicoli Nattrass, Adam

## Introducción

En El Salvador y Sudáfrica, la movilización de los marginados a nivel económico y social impulsó la transición a la democracia, obligando así a la liberalización inicial del régimen y sentando, al final, las bases políticas y económicas para un acuerdo de democratización. Este papel central de la insurgencia popular separa estos dos casos de la mayoría de otras transiciones a la democracia, en las cuales los actores sociales subordinados jugaron un papel más limitado, formando parte, en algunos casos, de una coalición democrática de tipo diferente; y en otros, organizando manifestaciones que afectaron la velocidad de la transición<sup>3</sup>. Los casos sudafricano y salvadoreño ofrecen, por tanto, una oportunidad para analizar el mecanismo mediante el cual la movilización “desde abajo” impulsa algunas transiciones de régimen. En estos casos, una movilización sostenida de personas pobres y de clase obrera transformó intereses claves de las elites económicas, presionando al Estado para que estableciera acuerdos con los insurgentes. De esta manera, fortaleció a los moderados del régimen contra los de línea dura. El resultado fueron las transiciones negociadas a la democracia. Los personajes centrales de estas transiciones no eran los grupos elitistas que competían entre ellos, tal como fue el caso en la mayoría de las transiciones de América Latina y del sur de Europa, sino representantes de distintas clases, cuyos conflictos de interés económico impulsaron el conflicto armado y cuya interdependencia económica contribuyó a colocar la base estructural para su resolución, a favor de la democratización. A este fenómeno lo llamo el “camino insurgente hacia la democracia”.

Estas transiciones a la democracia fueron muy controvertidas, ya que, en ambos casos, los dueños de los medios de producción, excepcionalmente concentrados, tenían motivos especiales para oponerse a la democratización. En ambas sociedades, la distribución de los ingresos y la perpetuación del privilegio económico fueron determinadas por instituciones en las cuales el Estado jugaba un papel mucho más importante que en las economías liberales. En estas sociedades tan desiguales, durante mucho tiempo, las elites económicas se opusieron a la democratización no sólo por el motivo usual —que las mayorías pudieran expropiar o cobrar impuestos elevados a los pocos—, sino también porque su bienestar económico dependía de procedimientos implementados por el Estado, que con toda probabilidad no se mantendrían en un régimen democrático. En Sudáfrica, estos privilegios incluían la dependencia de una mano de obra extranjera muy regulada, controles estrictos sobre la movilidad de la fuerza laboral nacional y una inversión pública extremadamente desigual, según la raza. En El Salvador, los privilegios incluían límites estrictos en la competencia política, el derrocamiento de los gobiernos reformistas, que intentaron medidas redistributivas moderadas, y prácticas coercitivas directas en los sitios de trabajo, las cuales, durante mucho tiempo, impidieron cualquier intento por organizar a los trabajadores. Por lo tanto, una transición a la democracia, iniciada por las elites, era poco probable en estos casos, así como también lo era una victoria militar por parte de las fuerzas insurgentes, dada la cohesión de las elites económicas y del régimen.

Ninguno de los dos países fue derrotado por un poder extranjero en una guerra, ni hubo tampoco

---

Przeworski, Kenneth Roberts, Philippe Schmitter, Jeremy Seekings, Jack Spence y William Stanley. Por su apoyo económico, agradezco al Instituto por la Paz de Estados Unidos, a la Academia para Estudios Internacionales y Regionales de Harvard, a la Fundación MacArthur, a través del Centro Stanford para el Control de las Armas, a la Fundación Tinker y al Instituto para el Estudio de la Política Mundial. Por su apoyo institucional, estoy agradecida a la Unidad de Investigación sobre las Políticas de Desarrollo y a la Unidad de Investigación sobre el Trabajo y el Desarrollo, ambas de la Universidad de Cape Town, y a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Elisabeth Jean Wood es profesora asociada de New York University, donde enseña política comparada y economía política. Ha hecho trabajo de campo durante muchos años en El Salvador, así como también en Sudáfrica. Es la autora de *Forging Democracy from Below: Insurgent Transitions in South Africa and El Salvador* [Forjando la democracia desde abajo: transiciones insurgentes en Sudáfrica y El Salvador] (Cambridge University Press, 2000) y de *Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador* [Acción colectiva insurgente y la guerra civil en El Salvador] (Cambridge University Press, 2002), un análisis etnográfico de la insurgencia campesina.

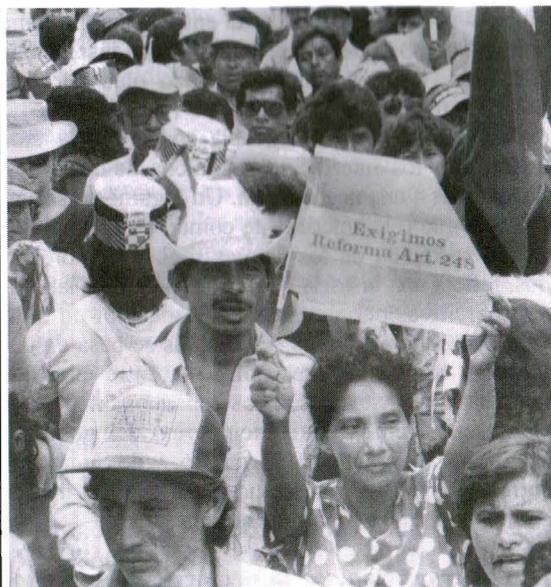
3. Una movilización “desde abajo” que culmina en una victoria insurgente militar, raras veces lleva a una democracia. Nicaragua en 1984 representa una excepción, pero es complicada por la participación de la comunidad internacional.

ninguna transición de régimen por imposición. Ya que estos caminos clásicos para llegar a la democracia estaban cerrados, una transición de esta naturaleza se consideraba muy poco probable en ambos casos<sup>4</sup>. Así, pues, la transición a la democracia en estos dos casos representa un acertijo. ¿Por qué las elites salvadoreñas —históricamente las más antidemocráticas del hemisferio y cuyo partido político principal fue fundado por el autor intelectual de los infames escuadrones de la muerte— aceptan, finalmente, la democracia? En el caso sudafricano, ¿por qué los líderes del régimen del *apartheid* decidieron abandonar sus intentos por limitar la ciudadanía y el sufragio y negociar con el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés)?

Como en muchos otros casos, el camino a la democracia recorrido en ambos países fue una transición negociada por representantes del régimen y de la oposición. Sin embargo, en un contraste notable con la mayoría de las transiciones negociadas, en las cuales algunos representantes de las elites económicas o de los partidos políticos tradicionales se sientan en la mesa, al lado de la oposición, en El Salvador y Sudáfrica, los líderes de ésta representaban a personas, cuyos bajos ingresos y exclusión política habían sido el fundamento de los ingresos de las elites.

Tres procesos inseparables conforman este camino insurgente hacia la democracia. Primero, en ambos países, la movilización política, reforzada por la exclusión política y económica, se profundizó hasta convertirse en insurgencia. El carácter limitado de las reformas y una represión brutal no sólo agravaron las quejas e imposibilitaron las modalidades más moderadas de protesta, sino que pusieron fin al liderazgo de la oposición popular, la cual se volvió una “contraelite insurgente”, es decir, en representantes de los actores económicamente subordinados y socialmente marginados, quienes constituyen una parte necesaria de las negociaciones para resolver una crisis duradera del régimen político.

Segundo, la movilización política sostenida al final llevó a algunas elites a considerar una negociación. Los costos acumulados por la insurgencia (incluyendo varias medidas contrainsurgentes) primero amenazaron, pero luego transformaron inte-



reses económicos centrales, convenciendo a sectores importantes de la elite que sus intereses estarían mejor protegidos con una transición democrática que obstinándose por mantener un régimen autoritario. Fue así como estas elites económicas presionaron a las elites del Estado para que negociaran, alternando el equilibrio del poder entre los moderados y los de línea dura del régimen. Tercero, los acuerdos políticos que sostenían estas transiciones adoptaron una forma especial: los insurgentes aceptaron la inclusión política a cambio de moderar su agenda económica, en particular aceptando el liberalismo económico, lo cual significaba pocos cambios en la distribución de la riqueza.

Este artículo analiza el segundo proceso, en el cual la movilización política sostenida impulsó a las elites recalcitrantes a negociar la democracia. El argumento se desarrolla utilizando un diseño de investigación basado en el “método de acuerdos” de J. S. Mill. En vísperas de la transición a la democracia, El Salvador y Sudáfrica eran diferentes por muchas razones, especialmente por sus niveles de industrialización, la institucionalización del Estado de derecho y el grado de división étnica. Sin embargo, el resultado común en ambos casos —la transición a la democracia, en una sociedad oligár-

4. Sobre El Salvador, ver Rueschemeyer, Huber Stephens, y Stephens (1992, p. 247); sobre los obstáculos generales a la resolución democrática de las luchas revolucionarias, ver Stinchcombe (1999, pp. 64-69).

quica— se puede atribuir a un antecedente próximo también compartido: la presencia de una insurgencia sostenida. El mecanismo que hizo plausible que dicho antecedente produjera el resultado fue la existencia de una insurgencia sostenida, la cual transformó los intereses económicos de las élites, llevándolas a una negociación. Un argumento secundario es que este antecedente común de una movilización sostenida de los actores sociales subordinados, refleja una historia común de prácticas laborales coercitivas permanentes, aplicadas por un régimen político excluyente. El análisis se basa en entrevistas con los actores políticos, entre ellos los líderes de la insurgencia, los representantes de la empresa privada y los funcionarios del gobierno en El Salvador, entre 1987 y 1996, y de Sudáfrica, entre 1997 y 1999, así como en el análisis de documentos y datos macroeconómicos.

### 1. Las transiciones a la democracia en las sociedades oligárquicas

La “tercera oleada” de transiciones a la democracia comenzó en América Latina y en el sur de Europa, donde las elites eran los actores dominantes, tanto en el régimen como en la oposición, en contraste con las transiciones subsecuentes en África, Europa Oriental y Asia, donde la protesta popular jugó un papel más significativo (Bratton y van de Walle, 1997; Collier, 2001; Geddes, 1999). En consecuencia, los análisis iniciales de las transiciones de la tercera oleada enfatizaron el papel de las elites: las elites moderadas del régimen inician un período de liberalización que, si resulta en un acuerdo con las elites moderadas de la oposición —generalmente líderes de los partidos políticos de oposición, ya que éstos fueron en su mayoría casos de redemocratización—, culmina en una transición a la democracia (O’Donnell y Schmitter, 1986; Przeworski, 1991). Según este análisis, una transición es un proceso político altamente contingente, en el cual los intereses económicos tienen poca importancia y la movilización popular es efímera y de efecto ambiguo. Aunque puede impulsar una transición, si se da al momento y alcanza el nivel oportuno, también puede reforzar la obstinación del régimen.

Esta literatura inicial no explicó la división inicial entre los moderados y los de línea dura, la cual se consideró exógena (Collier y Mahoney, 1997, pp. 286-287). Por lo general, la literatura evadió este problema al concentrarse en la dinámi-

ca de la transición que seguía después de la liberalización inicial, ignorando así los conflictos sociales y muchas veces económicos que, con frecuencia, llevaban a la liberalización. Además, incluía entre las “elites” a un amplio espectro de actores políticos, entre ellos a los líderes del régimen, de los partidos políticos establecidos, de los grupos de poder económico y de los movimientos sindicales y sociales organizados (Collier, 1999, pp. 17-19). El resultado fue no tener en cuenta la diferencia entre las transiciones que reflejan las debilidades del régimen de cara a la oposición política tradicional —por lo general, de elites— y aquellas otras en las cuales un grupo antes excluido del poder llega por la fuerza a la mesa de negociaciones.

Un pacto político entre los liderazgos en competencia fue clave para las dos transiciones que consideramos aquí —de hecho, pocas transiciones han sido diseñadas de una manera tan detallada con un resultado electoral tan seguro como en el caso sudafricano—. Pero éstos no fueron pactos entre elites, excepto en el sentido que cualquiera que participa en un pacto es necesariamente parte de una elite. Aunque la mayoría de los líderes, tanto del ANC como del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), eran personas con educación y oportunidades económicas bastante más amplias que las de los obreros y campesinos a quienes representaban. Aunque había pocas dudas de que los integrantes del equipo negociador del ANC serían miembros poderosos de cualquier gobierno post-*apartheid*, su lugar en la mesa de negociaciones sólo se debió a su papel como dirigentes de organizaciones insurgentes poderosas. Que posteriormente algunos de estos líderes se convirtieran en elites del régimen o en elites económicas después de las transiciones a la democracia, no debe confundirse con su papel de contraelite, en las negociaciones que llevaron a esas transiciones.

Dado que la literatura se basó cada vez más en un universo más amplio de casos, los analistas fueron reconociendo que casi todas las transiciones combinan elementos “desde arriba” con elementos “desde abajo”: una movilización de los actores sociales subordinados puede ser clave, en algunas circunstancias, para el proceso de transición democrática. De hecho, los académicos volvieron a estudiar algunos de los casos clásicos iniciales y encontraron que la movilización popular había jugado un papel más amplio en cuanto a impulsar la transición de lo que habían reconocido antes —tal

es el caso del análisis de Collier (1999) de los casos de España y Perú—.

Con la proliferación de argumentos para explicar los diferentes casos o los grupos de casos, en la literatura hay, sin embargo, poco consenso sobre las condiciones en las cuales la movilización popular puede contribuir a una transición democrática. No obstante, es evidente que varios temas se repiten. En contraste con el énfasis inicial en el cálculo político y no económico de los actores claves, la literatura ahora analiza con más frecuencia cómo los intereses económicos afectan la política de las transiciones —tal como hacen Haggard y Kaufman (1995)—. Es más frecuente recurrir a las diferencias entre los tipos de regímenes antecesores para explicar las variaciones importantes de los diversos casos (Geddes, 1999). Ampliando el trabajo de Therborn (1979) y Moore (1966), otros autores enfatizan la importancia de los actores de clase obrera, cuando obligan a las elites a extender el sufragio y la importancia de la existencia de burgueses urbanos o pequeños grupos rurales que puedan aliarse con dichos actores como resultado del desarrollo capitalista (Collier, 1999; Rueschmeyer, Huber Stephens, y Stephens, 1992). Finalmente, los actores internacionales y los cambios en las oportunidades internacionales pueden jugar un papel causal importante, en la política de las transiciones (Remmer, 1995).

El análisis que aquí se presenta considera estos enfoques. La naturaleza única del camino insurgente —la formación de una contraelite insurgente y la transformación de los intereses económicos de las elites— refleja el carácter oligárquico del régimen y de las estructuras de clase anteriores. Tanto Sudáfrica como El Salvador eran lo que denomino “sociedades oligárquicas”, en las cuales las élites económicas dependen de una regulación estatal, externa al mercado de la fuerza laboral para adquirir ingresos superiores a los que serían posibles con arreglos más liberales, basados en el libre mercado. Por lo tanto, las relaciones laborales dominantes de las sociedades oligárquicas se caracterizan por lo que Moore llamó “represión de la fuerza laboral”. Al hablar de “élites económicas,” me refiero a las personas que, gracias al control que ejercen sobre los medios de producción, pueden adquirir riqueza y estatuto social significativos. La “regulación fuera del mercado” se refiere a las instituciones que disciplinan la fuerza laboral de forma coercitiva: la esclavitud, las restricciones a su movilidad

—por medio de la servidumbre, el peonaje por deudas, las leyes contra la vagancia y las que prohíben residir en determinadas áreas, a no ser con permiso estatal— y graves violaciones de los derechos civiles, como la libertad de expresión y de asociación. De esta manera, reprimen los primeros intentos de los trabajadores para organizarse. En cambio, en las sociedades liberales, la regulación y la disciplina de la fuerza laboral se aplican a través de la competencia por los puestos de trabajo en el mercado laboral, la protección del derecho a la propiedad por parte del Estado y la negociación por parte de los trabajadores, quienes tienen libertad para organizarse colectivamente.

La distinción entre la regulación de la fuerza laboral como parte del mercado y la disciplina y el control de la misma por medios coercitivos no siempre es muy clara —tal como Moore mismo lo reconoce (1966, p. 434)—. Algunas prácticas, en los lugares de trabajo, desaniman la organización laboral, pero dichas prácticas no son consideradas coercitivas; de la misma manera, algunas modalidades para controlar la fuerza laboral fuera del mercado no sirven a los intereses de las elites económicas —por ejemplo, en el caso del corporativismo brasileño—. Sin embargo, parece útil distinguir los casos en los cuales los agentes del Estado actúan directamente para asegurar salarios y condiciones laborales, lo cual genera un alto nivel de ingresos para las elites económicas, de aquellos otros en los cuales el Estado crea un marco general de naturaleza liberal, basado en el mercado, para el desarrollo de las relaciones laborales.

En las sociedades oligárquicas, la dependencia de las elites económicas de la regulación de la fuerza laboral fuera del mercado por las elites del régimen crea una alianza duradera entre los dos grupos, en virtud de la cual aquéllas apoyan las estructuras políticas autoritarias de las cuales depende su posición económica. Además de ingresos más altos, posibles gracias a las prácticas laborales represivas, las elites económicas disfrutaban de otros privilegios, que tampoco serían sostenibles en un régimen democrático, como niveles y prácticas de inversión pública muy favorables para sus intereses. El resultado puede ser una desigualdad extrema y, además, definida racialmente, tal como sucedía en Sudáfrica, o una desigualdad menos extrema como en El Salvador; sin embargo, no es la desigualdad en sí la que explica las políticas características de las sociedades oligárquicas, sino la

forma como se mantiene. Ya que la distribución actual de los ingresos y la riqueza se perpetúa a través de la alianza oligárquica, cuando esa cohesión de las elites económicas y las del régimen que resulta es retada desde abajo, esto significa que estos regímenes no pueden ser derrocados por una movilización de alianzas de actores políticos de diferentes clases sociales, tal como fue el caso de los regímenes personalistas de Nicaragua, Filipinas y muchos regímenes africanos, donde algunas de las elites fueron excluidas del poder del Estado y apoyaron a las fuerzas insurgentes.

En las sociedades oligárquicas, los intereses de las elites del régimen y de las elites económicas, como es natural, difieren. Las elites económicas prefieren retener la parte más grande posible de sus ganancias para el consumo privado o para reinvertir, mientras que las elites del régimen prefieren captar recursos para el Estado, a través de los impuestos. Estas diferencias pueden crear tensiones importantes dentro de la alianza, en momentos de conformidad laboral, especialmente ahí donde las elites del régimen y las de los intereses económicos provienen de grupos étnicos distintos, como en Sudáfrica. Pero en las sociedades oligárquicas, las elites se unen para defender sus intereses comunes contra una movilización, que puede amenazar el control político de la fuerza laboral o la estabilidad del Estado y, con ello, la distribución actual de la riqueza, del poder político y del estatuto social.

En estas sociedades, la ideología de las elites económicas y del régimen —definidas o no en términos raciales— que excluye a los grupos subordinados, las prácticas laborales coercitivas, la aplicación rígida de divisiones de clase —y tal vez de raza— y la represión de la organización fomentan resentimientos profundos, que pueden ser movilizados por un grupo insurgente, a través de un llamado a una ciudadanía compartida. Más aún, una represión continua puede contribuir al surgimiento del liderazgo de un grupo contraelite de carácter insurgente (sobre Sudáfrica, ver Marx, 1992, 1998; Price, 1991; Seidman, 1994; sobre El Salvador, ver Wood, 2000, pp. 47-49). La insurgencia en las sociedades oligárquicas, por lo tanto, puede surgir y obligar a las elites económicas y del régimen a negociar una transición a la democracia.

## 2. La insurgencia, cambios de los intereses de las elites y la negociación en El Salvador

Estoy absolutamente dispuesto a vender. Ha sido una pesadilla, tratar de cultivar o alquilar la propiedad. Si queremos cultivar, ellos [los campesinos aliados del FMLN, quienes se tomaron la propiedad] no nos van a dejar. Terrateniente salvadoreño, entrevistado por la autora, 1992.

En El Salvador, una amplia movilización y luego una insurgencia guerrillera interrumpieron un patrón de regulación coercitiva de las relaciones laborales ejecutado por el Estado durante mucho tiempo. Ese patrón se forjó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el cultivo del café se expandió de manera rápida, en zonas densamente pobladas por indígenas. En América Latina es un patrón único. En vez del funcionamiento paulatino del mercado de tierras o de ofrecer salario como atractivo, en El Salvador los factores de producción para la expansión del café quedaron asegurados por la redefinición deliberada de los derechos de la propiedad, por decreto y coerción directa (Stanley, 1996; Williams, 1994). Se crearon cuerpos de seguridad para aplicar los nuevos derechos de los propietarios y despojar a las comunidades indígenas. Algunos miembros de dichas comunidades, sin embargo, se quedaron en las nuevas haciendas como una fuerza laboral casi adherida a la propiedad de la tierra.

Ya en la década de 1920, los terratenientes y algunas familias inmigrantes, las cuales invirtieron en los beneficios del café y las compañías exportadoras, comenzaron a conformar una oligarquía de unas docenas de familias. Aunque la economía se diversificó y las familias oligarcas fueron más numerosas después de la segunda guerra mundial, el poder económico se mantuvo extremadamente concentrado, ya que esta pequeña elite controlaba el sector financiero, el agrícola y el de la manufactura, el cual crecía lentamente (Colindres, 1976, 1977; Paige, 1987; Sevilla, 1985). Desde la supresión del levantamiento indígena de 1932 hasta la guerra civil —con excepciones breves—, los militares gobernaron el país, mientras las elites económicas controlaban la política económica, dirigiendo diferentes ministerios. Pese a que varias faccio-

nes reformistas del ejército intentaron modernizar la tenencia de tierras y las relaciones laborales, en algunas ocasiones (1944, 1960, 1972 y 1976), la alianza fundamental de terratenientes y militares de línea dura derrotó todos esos intentos reformistas. Aunque las relaciones patrón-cliente fueron reemplazadas de una manera gradual con mano de obra salariable, los fuertes vínculos de los terratenientes locales con los comandantes militares —incluyendo el acuartelamiento permanente de los cuerpos de seguridad pública, en algunas fincas privadas— perduraron hasta el inicio de la guerra civil, en 1980.

La brutal respuesta represiva del Estado salvadoreño al aumento de la movilización política de los campesinos, los obreros y los estudiantes, en la década de los setenta, hizo que muchos activistas no violentos apoyaran a las fuerzas guerrilleras —las cuales conformaron el FMLN, en 1980—. La amenaza que la movilización representaba, la represión y el conflicto armado llevaron a un grupo de oficiales reformistas a dar un golpe de Estado, en 1979. No obstante que los reformistas pronto fueron marginados, la persistencia de la amenaza insurgente llevó a que, con el apoyo de Estados Unidos, los militares y el Partido Demócrata Cristiano conformaran una alianza para gobernar, en 1980 (Stanley, 1996). Esta nueva alianza trajo varias reformas, diseñadas para debilitar las bases sociales de la insurgencia. A diferencia de las iniciativas anteriores, estas reformas perduraron. Para los oficiales de Estados Unidos y El Salvador, la reforma era necesaria, dada la capacidad militar del FMLN. Pese a estas reformas y a la ayuda estadounidense, a mediados de la década de los ochenta, llegó a un *impasse* militar, el cual resultó dramáticamente evidente en 1989, cuando el FMLN atacó San Salvador y se tomó varias colonias donde reside la gente rica.

Un *impasse* militar en sí mismo no crea las condiciones para la resolución duradera de un conflicto civil, tal como lo demuestra la guerra que aún continúa en Angola. En el caso salvadoreño, sin embargo, la guerra civil alteró de forma dramática la estructura económica del país, estableciendo así las condiciones estructurales para una resolución negociada. La insurgencia y las políticas contrainsurgentes del Estado tuvieron dos efectos económicos. El primero fue que la producción nacional bajó de forma rápida, después de haber alcanzado su punto máximo en 1978: el producto interno por persona (real) cayó un 28 por ciento, entre 1978 y 1982<sup>5</sup>. La fuga de capital contribuyó a esta caída, puesto que los dueños de la riqueza enviaron su capital fuera del país. Aunque se detuvo una caída prolongada —en parte, a través de una asistencia internacional masiva—, la producción se estancó, entre 1982 y 1989.

El segundo fue un cambio muy significativo en

---

[...] en las sociedades oligárquicas, las elites se unen para defender sus intereses comunes contra una movilización, que puede amenazar el control político de la fuerza laboral o la estabilidad del Estado...

---

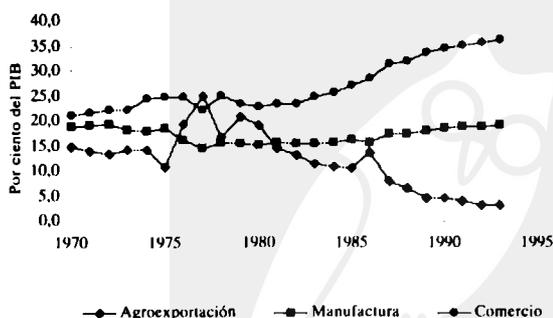
los aportes de los sectores que conformaban la economía. El producto nacional total, que descansaba en la agroexportación, la base económica de la oligarquía, descendió de manera pronunciada, mientras que los sectores comerciales y de servicios experimentaron un crecimiento grande (ver la Gráfica 1)<sup>6</sup>.

Este cambio sectorial ocurrió por varias razones, todas ellas relacionadas con la guerra. Las fuerzas guerrilleras sabotaban los cultivos de exportación y cobraban “impuestos de guerra”, que reducían las ganancias. La reforma agraria llevada a cabo como parte de la alianza contrainsurgente de 1980 resultó en la expropiación de alrededor de la cuarta parte de toda la tierra agrícola del país, incluyendo el 38 por ciento de las tierras dedicadas al café, en fincas grandes (de más de 100 hectáreas), el 28 por ciento de las tierras de algodón y el 11

5. Si no se especifica otra fuente, todos los datos salvadoreños provienen de las cuentas nacionales, publicadas por el Banco Central de Reserva, en su *Revista Trimestral*.
6. Las exportaciones agrícolas se definen aquí como la suma del valor agregado aportado al producto nacional bruto por la producción de café, algodón y azúcar. Incluye el procesamiento inicial del café y del azúcar, pero no el tostado del café, ni la producción de bebidas o el procesamiento de comidas.

por ciento de las tierras de caña de azúcar<sup>7</sup>. Más aún, en un caso clásico del “mal holandés”, un flujo extraordinario de dólares —tanto del gobierno de Estados Unidos como de los salvadoreños que emigraron por causa de la guerra— hizo que el precio de los bienes no transables se disparara, comparado con el precio de los bienes transables, golpeando aún más al sector exportador y aumentando el valor de los demás sectores. Es así como la rentabilidad del sector agroexportador bajó de manera drástica durante los años de la guerra, comparada con otros usos del capital. La reducción en las ganancias de la agroexportación hubiera sido aún mayor si no se hubieran mantenido ciertas políticas laborales durante la guerra: los salarios reales de los trabajadores del campo bajaron en un 63 por ciento, entre 1980 y 1991 (Boyce, 1996, Cuadro 1).

**Gráfica 1**  
**Estructura del producto interno bruto (PIB)**  
**en El Salvador (1970 a 1993)**



Estas tendencias económicas fueron resultado de la insurgencia —y de las medidas contrainsurgentes que ésta provocó— y no una consecuencia de la modernización gradual de la economía y de la expansión de los mercados. El Salvador no experimentó el proceso clásico de modernización por el cual la manufactura reemplaza al agro y crea fuerzas moderadas de clase, que se unen para desplazar a la élite agrícola. En lugar de ello, en El Salvador, la agroexportación creció como sector del producto nacional —y también en términos reales—, en la década de 1970, mientras que la manufactura bajó como parte de la producción. La

disminución de la agroexportación tampoco se debió a condiciones del mercado global, ni al clima, ni a variables de otra índole, si no cómo se explica que los sectores cafetaleros de los países vecinos, los cuales se enfrentaban a las mismas condiciones que los salvadoreños, hayan prosperado durante los años de la guerra (ver el Cuadro 1).

**Cuadro 1**  
**Producción de café en Centroamérica,**  
**porcentaje de cambio (1980 a 1991)**

País	Rendimiento	Área	Producción
El Salvador	-12.9	-3.1	-15.8
Guatemala	19.4	-3.9	14.3
Costa Rica	14.4	31.3	50.0
Honduras	29.2	22.2	56.8

*Nota:* Calculado como porcentaje de cambio entre el promedio de los valores de 1979 a 1981 y el promedio de los valores de 1990 a 1992.

*Fuente:* Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1992 y 1993, Tabla 78).

Resultado de esta transformación estructural fue que, a finales de la década de 1980, la mayor parte de los ingresos de las elites económicas de El Salvador provenían de los sectores comerciales y de servicios y no de la producción, ni de los procesos agrícolas tradicionales<sup>8</sup>. Entrevistas con salvadoreños ricos indican que las familias que no se diversificaron fueron marginadas económica y políticamente. Más aún, la posibilidad de más inversiones, a través de la participación en tratados de libre comercio, fue otro incentivo para poner fin a la guerra y así evitar que el comercio y las inversiones fueran a parar a otros países (Paus, 1996, p. 270).

La transformación de los intereses económicos de la elite no lleva, por sí sola, a una solución política negociada del conflicto. De hecho, a pesar de las reformas contrainsurgentes, la colaboración entre elementos de línea dura de la oligarquía y el ejército continuó, a principios de la década de 1980. Con la ayuda económica de exiliados salvadoreños ricos en Miami, derechistas de línea dura, encabe-

7. Calculado en base a las Tablas IV, V y VI de Wise (1986) y del censo agrícola de 1971.

8. Los datos sobre los portafolios personales no están disponibles. En El Salvador, la información de esta naturaleza es muy confidencial, incluso dentro de la misma familia.

zados por Roberto D'Aubuisson, crearon escuadrones de la muerte para detener la movilización política, a través de la intimidación y la violencia, y fundaron el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para luchar por el poder del Estado en las urnas<sup>9</sup>. La fundación de un partido político para representar directamente los intereses de la elite, en vez de depender del gobierno de los militares, fue una novedad en El Salvador. Incluso la competencia electoral limitada, dadas las condiciones de la guerra civil, produjo resultados inesperados: la promoción estadounidense de la liberalización política desembocó en el triunfo electoral de ARENA, en las elecciones legislativas de 1982. Se trataba de un partido político que representaba elementos de línea dura que se suponía que las reformas contrainsurgentes debían haber debilitado<sup>10</sup>. Después de que Estados Unidos expresara su fuerte oposición a que nombraran a D'Aubuisson presidente provisional, se llegó a un acuerdo, según el cual ARENA cedió la Presidencia de la República pero tomó el control del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de las instituciones de la reforma agraria, acabando así con ella. La brecha en la alianza oligárquica se volvió decisiva cuando los militares reconocieron la victoria del Partido Demócrata Cristiano, en las elecciones presidenciales de 1984 —un paso necesario si la ayuda estadounidense iba a continuar—.

Dado que ya no podían contar con sus aliados militares para gobernar, los líderes de ARENA buscaron ampliar su base electoral, atrayendo nuevos grupos de simpatizantes, entre ellos a los electores de la clase media y de los pequeños empresarios. En septiembre de 1985, dieron un paso importante en este proceso, cuando Alfredo Cristiani reemplazó a D'Aubuisson como presidente del partido, con lo cual éste tomaba distancia de los elementos de línea dura que integraban el grupo de Miami. El grupo de Cristiani, con sus intereses económicos diversificados, toleraba más las normas y aspiraciones democráticas que los miembros de la elite cuyos intereses se limitaban al cultivo del café, tal como Paige lo documenta (1997),

en sus extensas entrevistas con las elites salvadoreñas<sup>11</sup>. Para estas elites moderadas, la disminución de la agroexportación redujo su dependencia de las prácticas laborales coercitivas —el desempleo urbano y la competencia en el mercado laboral disciplinarían adecuadamente la fuerza laboral, en los sectores de servicios y comercio, que estaban en franca expansión, en ese momento—. Esto hizo que la probable solución negociada fuera imaginable. Con la ayuda de un centro de investigación, financiado por Estados Unidos, el grupo de Cristiani formuló y presentó una serie de políticas neoliberales (Johnson, 1993). El neoliberalismo era atractivo para estas élites por varias razones: el énfasis en la innovación del sector privado podía justificar la reprivatización de los sectores nacionalizados, con su agenda de reformas neoliberales, el Estado sería incapaz de amenazar los intereses económicos de la elite, aun cuando gobernara un partido hostil, y la liberalización de los flujos de capital disciplinaría el Estado contra las medidas redistributivas (Wood, 2000, pp. 244-246).



9. La Comisión de la Verdad para El Salvador (1993), establecida por los acuerdos de paz para investigar la violencia que se dio durante la guerra civil, documentó los vínculos cercanos entre los líderes y fundadores de ARENA (el Partido Alianza Republicana Nacionalista) y los escuadrones de la muerte.

10. ARENA sólo obtuvo una mayoría simple, pero con el apoyo de partidos aliados tenía la mayoría absoluta.

11. Un grupo de secuestradores que escogía a sus víctimas de entre la elite y que, además, incluía a militares vinculados con D'Aubuisson, también contribuyó a la transición de liderazgo (Stanley, 1996, pp. 238-240).

El partido renovado resultó atractivo para los votantes y Cristiani salió electo presidente, en 1989. Después de la ofensiva del FMLN de 1989, en San Salvador, las negociaciones para terminar la guerra comenzaron en serio con la mediación de Naciones Unidas y llevaron a una serie de acuerdos provisionales, que culminaron en la firma de los acuerdos finales de la paz, el 16 de enero de 1992. Los negociadores acordaron que una misión de Naciones Unidas vigilaría el respeto de los derechos humanos durante el cese del fuego —el primer despliegue significativo de una misión de Naciones Unidas para mantener la paz, después de una guerra civil—, acordaron reformas constitucionales de los sistemas judicial y electoral y del mandato y de los privilegios de la Fuerza Armada, y respaldaron la creación de una nueva policía civil. El FMLN se convertiría en un partido político, algunos de sus miembros se incorporarían a la nueva policía y ex combatientes de ambos bandos —así como los simpatizantes del FMLN que ocupaban tierras en las zonas de conflicto— tendrían oportunidad para comprar tierras con créditos. El proceso de paz culminó en las primeras elecciones inclusivas, en 1994, en las cuales el candidato de ARENA ganó la Presidencia de la República —en una segunda vuelta—, pero el FMLN obtuvo una votación respetable, el 25 por ciento de los votos de la primera vuelta.

Si los intereses económicos de las elites no hubieran cambiado, es muy poco probable que algunos elementos claves de los acuerdos negociados, especialmente la reforma de la policía y la transferencia de tierras a los simpatizantes del FMLN, hubieran sido aceptables para los negociadores de ARENA. La voluntad de llegar a un acuerdo fue, en parte, un reconocimiento de la transformación de las relaciones en el área rural, tal como se ha indicado al inicio de esta sección. Durante las entrevistas, los miembros de la elite describieron cómo cambiaron sus intereses, tal como lo hizo este miembro de una organización empresarial.

La estructura del capital ha cambiado. Los grandes capitalistas se han apartado de la agricultura, han dejado el campo hecho pedazos por la reforma agraria. Todavía hay algunos en la agroindustria y la agroexportación, en los beneficios de café y del algodón. Los capitalistas de tamaño mediano también han cambiado bastante su manera de pensar y de invertir; están diversificando en lo que recapitalizan al país. Ahora son los árabes [se refiere a los salvado-

reños de origen palestino] quienes son los capitalistas fuertes. Tienen poco en la tierra, han invertido en las textileras mas grandes y la *fast food* —en *MacDonald's*, *Biggest*, *Mr. Donut* y *Wendy's*— (entrevista con la autora, 1992).

En una entrevista, uno de los miembros de una familia oligarca dijo, en tono reflexivo, que si los miembros de la elite económica hubieran sido menos obstinados en la década de 1970, se hubiera podido evitar la guerra. Él, en cambio, estaba dispuesto a colaborar con el proceso de paz: “tenemos que ser positivos, no ha habido ni un solo disparo [durante el cese del fuego] y todos tenemos que pagar una cuota de sacrificio. No vaya a ser que parezca que favorezco ni al FMLN ni al ejército”. En las negociaciones de paz, los representantes de ARENA consistentemente defendieron los intereses de estos capitalistas diversificados, mientras sacrificaban los intereses de los pocos miembros de la elite —o ex miembros, ya que muchos de ellos eran mucho menos ricos— que aún permanecían concentrados en la agroexportación. Estos terratenientes lamentaron los términos de los acuerdos: “nosotros, los terratenientes, no estábamos representados en la mesa [de negociaciones] en México. ¡Ahora no hay nadie que represente nuestros intereses!” (entrevista con la autora, 1992).

Otros factores contribuyeron también a la resolución negociada de la guerra. El asesinato de los seis jesuitas por el Batallón Atlacatl, durante la ofensiva del FMLN de 1989, hizo que el Congreso de Estados Unidos renovara su oposición a continuar financiando a la Fuerza Armada salvadoreña (Whitfield, 1994). Dado que la Fuerza Armada salvadoreña dependía de la ayuda económica de Estados Unidos para contrarrestar la amenaza insurgente, el cambio de la política de éste hacia la negociación llevó a que los militares salvadoreños también la aceptaran. Mientras duró el empate militar, los moderados del FMLN ganaron terreno en el interior de éste. Así, el fin de la guerra fría reforzó la dinámica que impulsaba a las partes hacia una solución democratizante. Aunque pudo haber sido posible que el estancamiento militar junto con el fin de la guerra fría —sin que se produjera el cambio en los intereses económicos de la elite, que aquí se ha enfatizado— hubieran llevado a una solución de la guerra civil salvadoreña, es bastante dudoso que una transición a la democracia se hubiera dado tal como se dio, con tan poca violencia política, después de la firma de los acuerdos de paz.

### 3. Insurgencia, suspensión de la inversión y negociación en Sudáfrica

Era obvio que el camino en el que íbamos nos hubiera podido llevar a la ruina completa, a la tierra arrasada. Era cada vez más difícil para nosotros hacer negocio o viajar en el extranjero. De hecho, podíamos ver que venía una revolución. Allí estaba para que todos la vieran. (Funcionario de la Cámara de las Minas, entrevistado por la autora, 1997.)

En Sudáfrica, las instituciones laborales represivas, que databan del período colonial, aseguraban una fuerza laboral amplia y dócil para la agricultura y la minería, en una economía rica en recursos, pero con escasa mano de obra. El despoamiento continuo de los agricultores africanos generó una fuerza laboral creciente, que dependía de los salarios y bajaba los ingresos, que un patrón tenía que igualar para atraer trabajadores. Por lo tanto, los salarios de los trabajadores africanos en las minas no experimentaron aumento, en términos reales, entre 1911 y 1969, a pesar del crecimiento masivo de la productividad (Wilson, 1972). Mientras la manufactura y otras actividades económicas urbanas se expandieron durante todo el siglo XX, se permitió que una cantidad cada vez mayor de africanos trabajara y viviera en áreas restringidas. Sin embargo, de acuerdo a leyes aún más complejas, su residencia dependía de un pase válido, respaldado por su patrón, sin el cual estaban sujetos a ser deportados a las reservas laborales —que posteriormente se llamaron *bantustanes* o *homelands* (tierras de origen)—. Esta política fortaleció el poder de los patrones al deprimir los salarios de los trabajadores africanos en las reservas (Wintrobe, 1998; Wood, 2000, pp. 144-150).

La alianza incómoda, pero duradera, entre los *afrikáneres* y los “ingleses” —la población que, por lo general, habla inglés no *afrikáner*—, que venían del final de la guerra Boer, forjó una sociedad muy desigual, en la cual la clase y la raza coincidían cada vez más. El Partido Nacional gobernó sin interrupción entre 1948 y principios de la década de 1990, reflejando la debilidad de las aspiraciones liberales y transraciales de un electo-

rado casi exclusivamente blanco. Mientras el Estado promovía los intereses económicos y políticos de los *afrikáneres*, a costa de los intereses ingleses, los intereses de la elite comercial inglesa convergieron con los de la fuerza laboral blanca y del creciente grupo empresarial de aquéllos con respecto al mantenimiento de la segregación residencial, la ilegalidad de los sindicatos africanos y la privación del derecho al voto de los adultos no blancos<sup>12</sup>.

Después de que tropas gubernamentales abrieran fuego contra unos manifestantes, quienes protestaban por las leyes de pases, en Sharpeville, en 1960, y luego proscibieran el ANC, las protestas disminuyeron durante más de una década, hasta que surgieron las huelgas en Durban, en 1973. A pesar de varias medidas estatales para contener la organización laboral, los sindicalistas lograron formar varios sindicatos y federaciones, en la década de los setenta. En ese entonces, comenzó a surgir la movilización política, en las poblaciones africanas (*townships*). Después de que la policía mató a varios niños, en Soweto, en 1976, las protestas duraron más de un año, extendiéndose a más de un centenar de áreas urbanas.

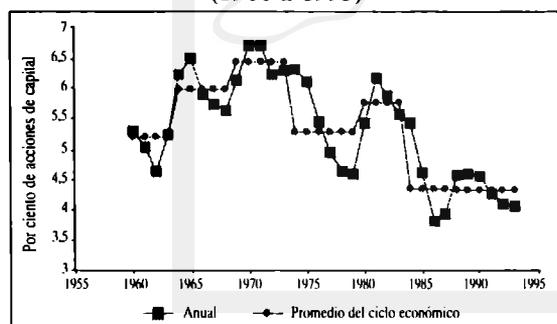
En respuesta a estos hechos, una modernización conservadora tomó dos formas, la reforma del mercado laboral y de las leyes de los pases, y la promoción de la representación política de los no blancos, en instituciones racialmente segregadas —incluyendo los *bantustanes*, los concejos municipales y los parlamentos de “asuntos propios”, integrados de acuerdo a la raza—. A partir de 1979, se aplicaron las recomendaciones de las comisiones Weihahn y Riekert, introduciendo cambios significativos en los reglamentos laborales, los controles sobre el flujo de personas, el gobierno de los *townships* y otras restricciones sobre los trabajadores y residentes africanos. Los sindicatos crecieron explosivamente y se volvieron cada vez más militantes, llevando a la formación de Congreso de Sindicatos Surafricanos (*Congress of South African Trade Unions, COSATU*), en 1985. Asimismo, con la organización del Frente Unido Democrático, las organizaciones cívicas se volvieron más militantes, en particular después de que la Constitución de 1983 reafirmara la exclusión de los africanos

12. Las diferentes políticas para regular la fuerza laboral tenían efectos contradictorios, y muchas organizaciones empresariales se oponían, consistentemente, a aquellas que limitaban la fuerza laboral urbana. Sin embargo, hasta las reformas de los años de 1970, el efecto global de las políticas de *apartheid* era mantener bajos los salarios y dócil a la fuerza laboral.

de la ciudadanía. La agitación se extendió y generalizó en Transvaal, entre 1984 y 1986, a pesar de la intensificación de una serie de estados de emergencia. Ya en 1985, la ocupación militar de algunos *townships* era necesaria para poder seguir gobernando. Varios esfuerzos gubernamentales por crear o atraer a negros moderados a nuevas discusiones constitucionales fracasaron, porque los candidatos se rehusaron a participar.

El fracaso de la modernización conservadora llevó a la disminución de la confianza económica. Excepto un aumento breve, entre 1979 y 1981, debido a un fuerte incremento en el precio mundial del oro, la inversión, que antes había sido muy fuerte, experimentó una disminución amplia y duradera —el cual puede ser considerado como una vuelta en U de la inversión—. Esto coincidió con la profundización de la movilización y la represión sostenida. La Gráfica 2 muestra que la relación entre la inversión interna privada bruta y los movimientos del capital, tanto en los datos anuales como para los promedios de los ciclos económicos, respondían a eventos políticos tales como la oleada de huelgas de Durban, en 1973; el levantamiento de Soweto, en 1976, y la amplia insurrección de 1984 a 1987<sup>13</sup>. Por lo tanto, la inversión disminuía a medida que la agitación aumentaba. Las explicaciones alternativas de la disminución de la inversión, en términos de la caída de las tasas de rentabilidad o la escasez de mano de obra calificada, son inconsistentes con las tendencias observadas en los datos relevantes (Wood, 2000, pp. 161-166).

**Gráfica 2**  
**Inversión privada en Sudáfrica,**  
**(1960 a 1993)**



Los analistas del Banco de Reserva de Sudáfrica —un grupo no muy dado a las explicaciones no económicas— atribuyen la vuelta en U de las inversiones a factores explícitamente políticos, incluyendo una falta generalizada de confianza en la economía, inseguridad amplia sobre el futuro del país, aumento de los disturbios civiles, percepciones negativas de las situaciones socioeconómicas y políticas en el extranjero, sanciones comerciales y boicots —sobre todo sanciones financieras—, la ausencia de inversión por parte de las empresas extranjeras y, a mediados de la década de 1980, la dominación del mercado laboral por “sindicatos fuertes y militantes, que negociaban con éxito salarios altos reales, los cuales no fueron acompañados por el crecimiento en la productividad” (Prinsloo y Smith, 1996, pp. 36-37)<sup>14</sup>.

Un análisis econométrico de la inversión en Sudáfrica confirma este énfasis en la inestabilidad política como determinante de la inversión. Heintz (2000) encontró que el índice de las huelgas y detenciones políticas fue un determinante estadísticamente significativo de la inversión: su análisis de la disminución observada en ésta, entre 1971 y 1992, concluye que el aumento de la inestabilidad política —sin cambio en los demás determinantes de la inversión, como el nivel de utilización de la capacidad, el costo del capital y la tasa de rentabilidad— explica la mayor parte de la disminución observada.

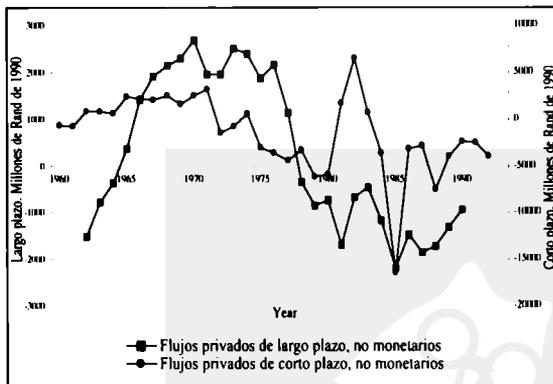
Otro indicador de la disminución de la confianza de los inversionistas es la reducción y el cambio de dirección de la inversión extranjera en la economía sudafricana. El promedio nivelado de los flujos reales del capital privado —excluyendo los relacionados con las reservas— en cinco años aumentó mucho, durante el auge de los años 1960, y se mantuvo elevado hasta comienzos de los setenta; luego cayó de manera pronunciada (ver Gráfica 3). Después de 1977, el capital de largo plazo huyó del país. La gráfica muestra también el flujo del capital de corto plazo —sin nivelar los promedios, para detectar los momentos claves del movimiento de capital—. En el auge de los sesenta, el capital de corto plazo se dirigió hacia Sudáfrica, pero, a partir de 1975, tomó el sentido contrario

13. Todos los datos sudafricanos provienen de las publicaciones del Banco de Reserva de Sudáfrica.

14. Prinsloo y Smith (1996) detallan también otros factores no políticos, tales como la sequía y la reducción de la inversión de algunos de las empresas paraestatales.

—exceptuando un aumento fuerte en el flujo, entre 1981 y 1983, después del aumento del precio del oro—. Durante los años de disturbios y los que siguieron —1973, 1976, y 1984-1987—, el flujo de capital de corto plazo disminuyó. Los análisis econométricos también confirman esta relación entre la inestabilidad política y el flujo del capital. Fedderke y sus colaboradores encontraron que la inestabilidad política determinó de manera significativa los movimientos de capital, entre 1960 y 1996<sup>15</sup>.

**Gráfica 3**  
**Flujo de corto y largo plazo de capital privado hacia Sudáfrica**



La insurgencia permanente tuvo otros efectos menos directos, afectando el comportamiento de otras variables económicas como la tasa de cambio y el costo del capital. Una consecuencia de la salida masiva de capital hacia el extranjero fue la caída, en el 34 por ciento, del valor del rand, entre 1983 y 1985. Dado que una proporción significativa de los bienes de capital era importada, la caída del rand contribuyó a un fuerte incremento en el costo de los préstamos y, por tanto, de las inversiones. Por ejemplo, el costo del capital para el sector manufacturero se elevó, a mediados de los ochenta, y se mantuvo en unos niveles altos sin precedentes hasta la transición (Prinsloo y Smith, 1998, p. 37). Más aún, a mediados de los ochenta, la movilización contra el *apartheid* dio uno de sus golpes más decisivos a la elite económica —un hecho poco conocido—, al lograr eliminar el subsidio del crédito que los inversionistas habían uti-

lizado durante mucho tiempo. Otra evidencia directa de la inestabilidad política fue el aumento de la inseguridad para los inversionistas, tal como lo demuestra un estudio del efecto de las noticias sobre disturbios en los cambistas de moneda extranjera. Para éstos, la posesión de rands era un riesgo elevado (Melvin y Tan, 1996).

La intensificación de las sanciones internacionales también contribuyó a la suspensión de la inversión, a la huida del capital y a la caída de la tasa de cambio. Pero estas sanciones no eran exógenas, sino que eran respuestas a la dinámica interna de movilización y represión —además de la movilización de activistas extranjeros, en sus propios países (Lowenberg y Kaempfer, 1998)—. Un estudio econométrico sobre las fechas de un gran número de “episodios de sanciones” durante todo el período, concluyó que el aumento en la cantidad y la intensidad de aquéllas reflejó el aumento de la actividad política de la oposición, en Sudáfrica, medida por el número de trabajadores negros que participaban en las huelgas (Kaempfer, Lowenberg, Mocan y Topyan, 1995, p. 23). Por ejemplo, la oleada más grande de sanciones —que incluyó sanciones económicas— fue motivada por la imposición de un estado parcial de emergencia, el 20 de julio de 1985, después de varios meses de disturbios.

En contraste con el caso salvadoreño, en el cual la insurgencia rural permanente llevó a la elite a cambiar sus intereses centrales, diversificándolos entre los distintos sectores de la economía, en el caso sudafricano, la movilización política representaba una amenaza más generalizada para los intereses económicos elitistas, exceptuando a unos pocos ricos —o quizás a ninguno sin excepción, lo cual subraya la importancia de este análisis agregado de la riqueza—. Hay dos razones por las cuales este impacto fue generalizado, en lugar de concentrarse en unos pocos sectores. La primera es que las principales aglomeraciones comerciales, tales como *Anglo American*, *Barlow Reed* y *Nedcor*, estaban muy diversificadas y tenían inversiones en una amplia gama de sectores. La segunda es que el elevado nivel de desarrollo de la bolsa de valores significaba que los líderes empresariales tenían en sus portafolios individuales un amplio espectro de intereses.

15. Vea Fedderke (2001) y Fedderke y Liu. Sin embargo, su índice de estabilidad política no incluye datos sobre huelgas, sino solamente otras formas de disturbios sociales.

La caída de la confianza en las instituciones sudafricanas no sólo afectó la inversión, sino que llevó a un período en el cual los líderes empresariales participaron de una manera extraordinaria en la política. Habían comprendido que no era posible reconciliar la creciente interdependencia entre las razas con la continuación de la exclusión política. En las entrevistas, los miembros de la elite empresarial enfatizaron la movilización laboral como el elemento central que los motivó a apoyar las reformas políticas. Así, por ejemplo, un ejecutivo importante aseveró que las compañías mineras perdieron 150 millones de dólares durante la huelga de 1987, en las minas de oro, y señaló que entre las lecciones aprendidas estaba la importancia de “la negociación integral, en la cual el resultado es una victoria para ambas partes”. El problema no se limitaba a las huelgas en los lugares de trabajo, según un funcionario de la Cámara de Minas.

A partir de los años ochenta, en las áreas muy conflictivas, uno no sabía si su fuerza laboral iba a llegar al trabajo en la mañana —y era muy común que un 20 por ciento no llegara, porque había barricadas y simplemente no podían pasar—. O cuando llegaban, estaban agotados, porque los habían aterrorizado la noche anterior. Esencialmente, estaban dañando la productividad de la fuerza laboral. (Entrevista con la autora, 1997.)

Y, siguió, “uno no tenía acceso a los mercados internacionales. Las sanciones financieras nos dolían. Así que varios factores crearon un clima de opinión que decía que la situación actual no era sostenible”. Miembros de la elite económica que fueron entrevistados enfatizaron su percepción de que la movilización laboral fue fuerte debido, en parte, a la ausencia de reformas políticas fundamentales. Por ejemplo, según un funcionario de la Cámara de Comercio de Sudáfrica,

Ya que [los trabajadores] no tenían cómo expresar la libertad política, utilizaron la situación laboral, el lugar de trabajo, para expresarla. Y eso fue un punto de presión importante hacia la empresa. (Entrevista con la autora, 1997.)

O, como lo expresó un ejecutivo minero,

[No existía] ninguna forma política legítima para expresar la inconformidad política, así que ésta se tuvo que canalizar por el único medio que existe. Y el único medio que efectiva-

mente no se puede quitar es el trabajo. Se puede condenar la organización, pero no se puede condenar a los trabajadores. (Entrevista con la autora, 1997.)

Frustrados por la vacilación del gobierno que se esforzaba en vano por cultivar una oposición negra moderada, a través de reformas limitadas y una represión en aumento, representantes de los intereses empresariales tomaron una serie de iniciativas que contribuyeron de manera crucial a la acumulación de presiones sobre la elite estatal para hacer avanzar la reforma política.

Entre estas iniciativas se encuentran las campañas de las organizaciones empresariales para impulsar la reforma política. En enero de 1985, todas las organizaciones empresariales principales —incluyendo las de los *afrikáneres*, que, por lo general, era muy conservadoras— hicieron un llamado para crear una ciudadanía común y significativa, eliminar las leyes de pases y poner fin a los desposeimientos forzados (Lipton, 1985, p. 254). Después del discurso recalcitrante de P. W. Botha, el 15 de agosto de 1985, muchas organizaciones empresariales fueron más allá y pidieron la liberación de Nelson Mandela y negociaciones con el ANC (O’Meara, 1996, p. 331). En 1986, la Cámara Federada de Industrias hizo un llamado a los derechos universales a la propiedad, a la ciudadanía sudafricana y al voto secreto —incluyendo la protección de los derechos de las minorías con una fórmula constitucional vaga—, así como otras libertades civiles. Aunque algunos empresarios individuales, como Harry Oppenheimer, desde posiciones liberales, se habían opuesto esporádicamente a algunas políticas específicas desde 1948, el nivel, el radicalismo y la coordinación de estos esfuerzos no tenían precedentes.

Los miembros de la elite económica también dieron pasos más directos para obligar al régimen a una solución política negociada. En septiembre de 1985, un grupo de ejecutivos de las compañías más grandes de Sudáfrica viajó a Lusaka para reunirse clandestinamente con el comité ejecutivo del ANC y discutir la economía y el gobierno después del *apartheid* (Price, 1991, pp. 238-240). Aunque otras organizaciones y grupos participarían en encuentros similares poco después, fue la empresa privada la que tomó la iniciativa del “viaje a Lusaka”, haciendo más fácil que los otros grupos siguieran su ejemplo. A finales de 1986, un grupo de ejecutivos de corporaciones grandes se

reunió con representantes locales de las organizaciones de la oposición —incluyendo a varios proscritos—, en Sudáfrica. Esta discusión llevó a la fundación de Movimiento Empresarial de Consulta, cuyo objetivo era generar confianza mutua entre la empresa, las fuerzas de la oposición y los funcionarios gubernamentales. Posteriormente esta organización serviría como la secretaría para las negociaciones. Dos de las corporaciones grandes, *Nedcor* y *Old Mutual*, hicieron presentaciones a centenares de grupos empresariales y de otro tipo por todo el país, en 1986 y 1987. En ellas contrastaban dos posibles futuros para Sudáfrica: en uno había un régimen de un solo partido, el socialismo africano, que llevaba a la depresión económica, y en el otro había un gobierno democrático, integrado por una coalición de negros y blancos, que implementaba una política económica pragmática, limitada por una declaración de los derechos constitucionales (Tucker y Scott, 1992). Según uno de los ejecutivos que participó en este movimiento, el mensaje era claro: si Sudáfrica iba a seguir siendo rentable, los cambios políticos eran necesarios y debía haber negociación.

A finales de los ochenta, muchos ejecutivos de las grandes empresas y casi todas las organizaciones empresariales estaban de acuerdo en que el país debía moverse hacia una democracia liberal no racial, que el Estado debería jugar un papel en la redistribución de la riqueza y en aliviar la pobreza con los ingresos provenientes del crecimiento, y en la necesidad de negociar con el liderazgo negro (Bernstein y Goodsell, 1988, pp. 170-171). Después de la puesta en libertad de Nelson Mandela y de eliminar la proscripción del *ANC*, miembros de la elite económica siguieron desempeñando un papel clave en el proceso. En 1989, representantes de la empresa y trabajadores negociaron una serie de acuerdos sobre varios aspectos de las relaciones laborales. Establecieron así el marco de referencia de las relaciones entre el capital y el trabajo, después de la transición. De esta manera contribuyeron al proceso global de la transición. El proceso culminó en la institucionalización del papel del capital y del trabajo en el diseño de la política económica, a través de un foro corporativista de negociación, el National Economic Development and Labour Council (*NEDLAC*), el cual fue establecido unos meses después de las elecciones de 1994.

A principio de la década de 1980 comenzó el colapso de la coalición tradicional del Partido Nacional de los sindicatos blancos, la empresa *afrikáner* y el sector estatal como consecuencia de la disminución de la actividad económica, debida, en parte, a la reducción de la inversión y a los esfuerzos gubernamentales por reformar el *apartheid*. Desilusionados, algunos miembros del Partido Nacional lo abandonaron y se incorporaron al nuevo Partido Conservador. El mal estado de la economía también motivó a algunos trabajadores a buscar otros caminos. A principios de la década de los ochenta, menos de la mitad de los *afrikáneres* apoyaban al Partido Nacional (O'Meara, 1996, p. 308). Otros simpatizantes estaban consternados por el fracaso de los intentos para reformar el partido. El sector empresarial *afrikáner* percibía cada vez más que sus intereses principales coincidían más con los de la empresa inglesa que con los del Partido Nacional y los *afrikáneres* en general. Por lo tanto, participaron en iniciativas que pedían una reforma fundamental. Después del levantamiento y la represión de 1984-1986, un creciente número de intelectuales y líderes religiosos importantes de la comunidad *afrikáner* renunció al *apartheid*. El fracaso de los intentos para liberalizar éste sin limitar la superioridad de los blancos dejó al partido sin agenda, especialmente después de que el fin de la guerra fría debilitara la justificación de la línea dura para continuar con su obstinación (Giliomee, 1997, pp. 17-19).

Además, el Partido Nacional enfrentaba otros problemas, incluyendo el desplazamiento de miembros de su vieja guardia como resultado de la creciente militarización del gobierno de Botha, la creciente oposición a la expansión del ejército en los países vecinos y al servicio militar obligatorio de los blancos, y los costos crecientes de la burocracia del *apartheid*, con sus cinco presidentes, sus 1 500 parlamentarios y decenas de miles de miembros de concejos locales (O'Meara, 1996, p. 351). Estos temas, junto con el fracaso de la reforma y la represión, profundizaron las divisiones entre los moderados y los conservadores del partido.

La creciente presión para introducir cambios políticos importantes, tanto de la insurgencia como de la elite económica, así como también la presión indirecta que representaba el estancamiento económico —alimentado por la suspensión de la inversión de la elite y las sanciones impuestas

como respuesta a la represión y la obstinación del régimen—, llevaron a que los líderes moderados del partido y los funcionarios gubernamentales empujaran cada vez más desde el régimen mismo para hacer reformas fundamentales. Desde 1985, funcionarios del régimen, entre ellos Kobie Coetsee y Niëls Barnard, sostenían conversaciones periódicas con Nelson Mandela; en 1984, funcionarios del gobierno se reunieron en secreto con miembros del ANC, en Ginebra; otra reunión tuvo lugar en París, en 1986<sup>16</sup>. Aunque el presidente P. W. Botha lanzó algunas de estas iniciativas y aceptó otras, no las reconoció públicamente. Cuando perdió su poder, debido a la enfermedad, F. W. de Klerk, vinculado con otros líderes del partido y no con los “segurócratas” de Botha, se convirtió primero en líder del Partido Nacional y luego en presidente del Estado. Conocido como conservador, de Klerk resultó ser también pragmático. Sin más puso en libertad a Mandela y puso fin a la proscripción del ANC y del Partido Comunista de Sudáfrica, haciendo posible una transición negociada.

En contraste con la confianza de ARENA en cuanto a que podía competir con éxito en las elecciones posteriores a la transición, el Partido Nacional negoció a la sombra de una victoria casi segura del ANC en elecciones no raciales. En el largo proceso de negociación, que culminó en las elecciones de 1994, los intereses económicos de la elite quedaron bien protegidos en las constituciones y en las leyes laborales. De hecho, en 1992, el ANC ya había eliminado de sus propuestas políticas la nacionalización y había aceptado la liberalización del comercio (Nattrass, 1994; Padayachee, 1998). El principio del derecho de propiedad, permitiendo la expropiación sólo en circunstancias limitadas y con compensación, quedó bien establecido, tanto en la Constitución interina de 1993 como en la definitiva de 1996. Aunque el derecho

de propiedad estaba protegido, el Partido Nacional fracasó en su intento por asegurar los intereses de la minoría blanca, a través de esquemas basados en la etnia. El *apartheid* había impuesto patrones estrechamente relacionados de clase y raza. Una de sus herencias fue un movimiento no racial poderoso, integrado por actores sociales subordinados, que rechazaba las categorías étnicas definidas por el Estado. En vez de ello, declaró la pertenencia a una ciudadanía común, en una sola nación (Marx, 1992, 1998). El ANC hizo concesiones federalistas, pero los arreglos para compartir el poder no incluyeron ningún reconocimiento explícito de los derechos de los grupos (mucho menos un veto para el Partido

Nacional); sólo permitieron la repartición del gabinete y las vicepresidencias durante el primer gobierno, posterior a la transición.

---

Las elites económicas de ambos países llegaron a creer que sus intereses estarían mejor protegidos con una transición a la democracia, combinada con la disciplina de la fuerza laboral, facilitada por la abundancia de trabajadores del mercado, por la disciplina en la política económica, garantizada por la amenaza de la fuga del capital, en las economías liberales, y por garantías constitucionales que protegieran sus propiedades.

---

#### 4. Conclusión

¿Por qué entonces las elites de estas sociedades oligárquicas abandonaron su oposición implacable a la democracia y negociaron una transición a la democracia? Por el camino insurgente a la democracia que aquí se describe. La insurgencia se sostuvo durante el tiempo necesario para crear las condiciones estructurales para la solución del conflicto. Se constituyó en una contraelite insurgente con la cual era necesario negociar; además de que amenazó directamente los intereses y las oportunidades de las elites económicas —a través de la movilización laboral, en Sudáfrica, y de la insurrección campesina, en El Salvador—. De esta manera, éstas concluyeron que los resultados previsibles de una obstinación continuada serían menos favorables que los resultados de una solución negociada con los insurgentes. Las elites económicas de ambos países llegaron a creer que sus intereses estarían mejor protegidos con una transición a la democracia, combinada con la disciplina de la fuerza laboral, facilitada por la abundancia

16. Este párrafo está basado en el trabajo de Sparks (1995), Seegers (1996) y Waldmeir (1997).

de trabajadores del mercado, por la disciplina en la política económica, garantizada por la amenaza de la fuga del capital, en las economías liberales, y por garantías constitucionales que protegieran sus propiedades. De este modo, las elites económicas presionaron por una negociación con las fuerzas insurgentes. Al igual que en muchos países, tanto en Sudáfrica como en El Salvador, una vez comenzadas las negociaciones, la contraelite insurgente aumentó la movilización política cuando éstas encontraron tropiezos, las cuales hacían las veces de recordatorio permanente de su capacidad para imponer costos a las elites económicas y del régimen<sup>17</sup>.

En respuesta a la represión creciente y a reformas inadecuadas, los actores internacionales reforzaron las presiones nacionales sobre el régimen para que negociara, imponiendo sanciones en Sudáfrica y condicionando la ayuda militar en las negociaciones de El Salvador. Además, la caída de los regímenes comunistas en Europa oriental hizo cada vez menos probable la imposición de políticas socialistas al mismo tiempo que hizo más difícil justificar la oposición de las elites a la democracia. La hegemonía global del neoliberalismo dio confianza a las elites. A partir de entonces era poco probable que otros modelos económicos alternativos se sostuvieran, si llegaban a implantarse. Estos dos factores limitaron las posibilidades de largo plazo, facilitando así la negociación, al reforzar las dinámicas esencialmente democráticas de la solución negociada. Al inicio, la Fuerza Armada salvadoreña limitó su autonomía, pero al final cedió ante la presión estadounidense, puesto que no pudo derrotar al FMLN. De manera similar, la condena moral durante mucho tiempo del régimen del *apartheid* provocó sanciones internacionales efectivas hasta que la movilización masiva y la represión brutal dentro de Sudáfrica hicieron que los estados, las organizaciones internacionales y la empresa global fueran más allá de las medidas meramente simbólicas.

La tesis que aquí se sostiene está relacionada con la vía de "desestabilización - salida" de Collier (1999), según la cual las manifestaciones de la clase obrera desestabilizan al régimen autoritario, iniciando procesos que, al final, desembocan en transiciones (pp. 114-132). Sin embargo, el papel causal que desempeñan los actores sociales subordinados en estas dos transiciones fue significativamente mayor. No sólo la contraelite insurgente

se sentó en la mesa de negociación —de la misma manera en que lo hicieron los representantes de los trabajadores, en algunos de los casos de Collier—, sino que, en ambos casos, ninguna otra parte de las que participaron en las negociaciones —exceptuando al gobierno— tenía la importancia de los insurgentes para garantizar el éxito de cualquier acuerdo al que se llegara.

Hay, por supuesto, diferencias significativas entre estas dos transiciones, a pesar de tener como denominador común el mismo camino insurgente a la democracia. En El Salvador, la insurgencia pasó de una movilización amplia a una guerra civil, sobre todo en el campo, produciendo un cambio sectorial masivo en los principales intereses de la elite económica. En Sudáfrica, la insurgencia fue urbana. Las movilizaciones laboral y comunal redujeron las ganancias de casi todos los sectores y minaron la confianza empresarial, llevando a una disminución de la inversión agregada. Un aspecto clave del proceso salvadoreño fue la fundación de un partido político, que representaba los intereses económicos de la elite. Después de que ARENA ganara las elecciones de 1989, miembros de la elite económica, cuyos intereses se habían diversificado, llegaron a ser los moderados del régimen y quienes controlaron el poder ejecutivo. En contraste, un aspecto clave del proceso sudafricano fue la caída del partido político que había gobernado el país durante mucho tiempo. Finalmente, los resultados de las elecciones después de las transiciones —en 1994 y 1999 respectivamente— fueron distintos. El ANC llegó al poder, mientras que el FMLN encabezó la oposición —pero aumentó gradualmente su poder, en el nivel municipal y legislativo—.

Este argumento tiene varias implicaciones para la comprensión de las transiciones de régimen. En primer lugar, para explicar las alianzas, variadas y cambiantes, que determinan los cambios que conducen a la democratización, es necesario distinguir entre las elites políticas tradicionales, las elites del régimen —de tipo diferente—, los diferentes tipos de elites económicas, las cuales aseguran sus ingresos de manera diversa, los líderes de los movimientos laborales o populares, quienes desempeñan un papel eventual, pero importante, y las contraelites insurgentes, parte indispensable de la negociación, debido a la capacidad de sus organizaciones para sostener una movilización, a través de los años.

17. Adler y Webster (1995) documentan cómo la movilización insurgente impulsó las negociaciones en Sudáfrica, después de que comenzaron.

En segundo lugar, las diferentes formas de movilización representan amenazas diferentes para los distintos regímenes. Estas diferencias deben ser explicadas por su relevancia para entender las causas. Aunque incorporaron una gama heterogénea de personas económicamente marginadas, las dos insurgencias, tanto en Sudáfrica como en El Salvador, lograron la participación masiva de las clases de quienes las elites dependían para obtener sus ganancias, causándole así pérdidas sustanciales.

En tercer lugar, los intereses económicos de las elites —excepto los más abstractos, tales como el derecho de propiedad— son parte de la trayectoria del conflicto; no son fijos, como se presupone en muchas teorías de las ciencias sociales, incluyendo las versiones sencillas del marxismo y del análisis de la elección racional. Estas tres lecciones pueden ayudar a explicar la división inicial clave entre los de línea dura y los moderados, donde tiene lugar el comienzo de la liberalización en otros países.

En cuarto lugar, donde el conflicto civil está estructurado en lo fundamental en clases, la interdependencia económica de los grupos en competencia puede contribuir a la negociación —aun cuando las diferencias étnicas van de la mano con las diferencias de clase, como en Sudáfrica—, en contraste con las guerras civiles, en las cuales las partes son económicamente independientes, como cuando los insurgentes controlan diamantes o cocaína (Wood, 2000, pp. 197-208 y 213-218).

## Bibliografía

- Adler, Glenn, y Webster, Eddie. (1995). "Challenging Transition Theory: The Labor Movement, Radical Reform, and Transition to Democracy in South Africa". *Politics and Society* 23, 75-106.
- Bernstein, Ann, y Godsell, Bobby. (1988). "The Incrementalists". En Peter L. Berger y Bobby Godsell (eds.), *A Future South Africa: Visions, Strategies, and Realities* (pp. 164-199). Boulder, CO: Westview.
- Boyce, James K. (ed.). (1996). *Economic Policy for Building Peace: The Lessons of El Salvador*. Boulder: Lynne Rienner.
- Bratton, Michael, y van de Walle, Nicholas. (1997). *Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colindres, Eduardo. (1976). "La tenencia de la tierra en El Salvador". *Estudios Centroamericanos* 31, 335-336, 463-472.

- Colindres, Eduardo. (1977). *Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña*. San Salvador: UCA Editores.
- Collier, Ruth Berins. (1999). *Paths Toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collier, Ruth Berins. (2001). "Democratic Transition". En Paul Barry Clark y Joe Foweraker (eds.), *Encyclopedia of Democratic Thought*. London: Routledge.
- Collier, Ruth Berins, y Mahoney, James. (1997). "Adding Collective Actors to Collective Outcomes: Labor and Recent Democratization in South America and Southern Europe". *Comparative Politics* 29, 285-303.
- Comisión de la Verdad para El Salvador. (1993). *De la locura a la esperanza: la guerra de doce años en El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador*. New York y San Salvador: Naciones Unidas.
- Fedderke, J. W., de Kadt, R. H. J., y Luiz, J. M. (sin fecha). "Growth and Institutions: A Study of the Link Between Political Institutions and Economic Growth in South Africa - A Time Series Study, 1935-1997". *Econometric Research Southern Africa Working Paper 1*, University of the Witwatersrand.
- Fedderke, J. W., y Liu, W. (sin fecha). "South African Capital Flows and Capital Flight over The 1960-1995 Period". *Econometric Research Southern Africa*, University of the Witwatersrand.
- Geddes, Barbara. (1999). "What Do We Know About Democratization After Twenty Years?". *Annual Review of Political Science* 2, 115-44.
- Giliomee, Hermann. (1997, 26 de febrero). "Surrender Without Defeat: Afrikaners and The South African Miracle". Documento presentado en el Centre for African Studies, University of Cape Town.
- Goodwin, Jeff, y Skocpol, Theda. (1989). "Explaining Revolutions in The Third World". *Politics and Society* 17, 489-509.
- Haggard, Stephan, y Kaufman, Robert. (1995). *The Political Economy of Democratic Transitions*. Princeton: Princeton University Press.
- Heintz, James. (2000). "Political Unrest, Distributive Conflict, and Investment: The Case of South Africa". Documento no publicado, Departamento de Economía, Universidad de Massachusetts.
- Johnson, Kenneth. (1993). "Between Revolution and Democracy: Business Elites and The State in El Salvador during the 1980s". Disertación doctoral no publicada, Universidad de Tulane, Departamento de Ciencias Políticas.

- Kaempfer, W. H., Lowenberg, A. D., Mocan, H. N., y Topyan, K. (1995). "International Sanctions and Anti-Apartheid Politics in South Africa: An Empirical Investigation". *Journal for Studies in Economics and Econometrics* 19, 1-27.
- Lipton, Merle. (1985). *Capitalism and Apartheid: South Africa, 1910-84*. Totowa, NJ: Rowman & Allanheld.
- Lowenberg, Anton D., y William H. Kaempfer. (1998). *The Origins and Decline of South African Apartheid: A Public Choice Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Marx, Anthony W. (1992). *Lessons of Struggle: South African Internal Opposition, 1960-1990*. New York: Oxford University Press.
- Marx, Anthony W. (1998). *Making Race and Nation: A Comparison of South Africa, The United States and Brazil*. New York: Cambridge University Press.
- Melvin, Michael, y Tan, Kok-Hui. (1996). "Foreign Exchange Market Bid-Ask Spreads and The Market Price of Social Unrest". *Oxford Economic Papers* 48, 329-341.
- Moore, Barrington, Jr. (1966). *Social Origins Of Dictatorship and Democracy*. Boston: Beacon.
- Natras, Nicoli. (1994). "Politics and Economics in ANC Economic Policy". *African Affairs* 93, 343-359.
- O'Donnell, Guillermo, y Schmitter, Philippe C. (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- O'Meara, Dan. (1996). *Forty Lost Years: The Apartheid State and The Politics of The National Party, 1948-1994*. Randburg y Athens, OH: Ohio State University Press (y Ravan Press).
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (1992 y 1995). *Anuario de producción*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- Padayachee, Vishnu. (1998). "Progressive Academic Economists and The Challenge of Development in South Africa's Decade of Liberation". *Review of African Political Economy* 25, 431-450.
- Paige, Jeffrey M. (1987). "Coffee and Politics in Central America". En Richard Tardanico (ed.), *Crises in the Caribbean Basin* (pp. 141-190). Newbury Park, CA: Sage.
- Paige, Jeffrey M. (1997). *Coffee and Power: Revolution and The Rise Of Democracy in Central America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Paus, Eva. (1996). "Exports and The Consolidation of Peace". En James K. Boyce (ed.), *Economic Policy for Building Peace: The Lessons of El Salvador* (pp. 247-278). Boulder: Lynne Rienner.
- Price, Robert M. (1991). *The Apartheid State in Crisis: Political Transformation in South Africa 1975-1990*. New York: Oxford University Press.
- Prinsloo, J. W. y Smith, H. (1996, diciembre). "Developments in Fixed Capitol Stock". *Quarterly Bulletin* (pp. 31-44). Johannesburg: South African Reserve Bank.
- Przeworski, Adam. (1991). *Democracy and The Market*. New York: Cambridge University Press.
- Remmer, Karen L. (1995). "New Theoretical Perspectives on Democratization". *Comparative Politics* 28, 103-122.
- Rueschemeyer, D., Huber Stephens, E., y Stephens, J. D. (1992). *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Seegers, Annette. (1996). *The Military in The Making of Modern South Africa*. Londres: I. B Tauris.
- Seidman, Gay W. (1994). *Manufacturing Militance: Workers' Movements in Brazil and South Africa, 1970-1985*. Berkeley: University of California Press.
- Sevilla, Manuel. (1985). "La concentración económica en El Salvador". Managua: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.
- Sparks, Allister. (1995). *Tomorrow Is Another Country*. Chicago: University of Chicago Press.
- Stanley, William. (1996). *The Protection Racket State: Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador*. Philadelphia: Temple University Press.
- Stinchcombe, Arthur L. (1999). "Ending Revolutions and Building New Governments". *Annual Review of Political Science* 2, 49-73.
- Therborn, Goran. (1979). "The Rule of Capital and The Rise of Democracy". *New Left Review* 113-114, 71-109.
- Tucker, Bob, y Scott, Bruce R. (1992). *South Africa: Prospects for Successful Transition*. Kenwyn: Juta and Co. Ltd.
- Waldmeir, Patti. (1997). *Anatomy of a Miracle: The End of Apartheid and The Birth of The New South Africa*. Nueva York: W.W. Norton.
- Whitfield, Teresa. (1998). *Pagando el precio: Ignacio Ellacuría y el asesinato de los jesuitas en El Salvador*. El Salvador: UCA Editores.
- Williams, Robert G. (1994). *States and Social Evolution: Coffee and The Rise of National Governments in Central America*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Wilson, Francis. (1972). *Labour in South African Gold Mines*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wintrobe, Ronald. (1998). *The Political Economy of Dictatorship*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wise, Michael. (1986). *Agrarian Reform in El Salvador, Process and Progress*. San Salvador: U.S. Agency for International Development.
- Wood, Elisabeth Jean. (2000). *Forging Democracy from Below: Insurgent Transitions in South Africa and El Salvador*. Cambridge: Cambridge University Press.